

del art. 4º de la Constitución de la República, negándole el ministro de la guerra la licencia absoluta que le ha pedido, porque alega que es desertor; Visto el informe del ministerio de la guerra, confirmando los hechos asentados por el promovente, explicando con apoyo de la filiación de éste, que fué consignado al servicio militar por cinco años, y sosteniendo que no ha habido violación de garantías, porque la consignación se verificó estando aquellas suspensas por la ley de 17 de Enero de 1870. Vistos los pedimentos del promotor fiscal, la prueba y alegato del quejoso, y la sentencia del juez 1º de Distrito con todo lo demás que fué necesario tener presente.

Considerando: que Cristóbal Gonzalez entró al servicio militar contra su voluntad; que se le reaprehendió como desertor estando comprendido en la ley de amnistía fecha 14 de Octubre de 1870, según la cual debía quedar en libertad; y que en consecuencia, obligarlo á continuar en el servicio de las armas, es violar en su persona la garantía que consigna el art. 5º de la Constitución federal. Con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma el fallo del juez 1º de Distrito de México, pronunciado en 5 del presente mes, declarándose: que la justicia de la Unión ampara y protege á Cristóbal Gonzalez contra la determinación del ministerio de la guerra para que siga de soldado, por violarse en su persona la garantía que otorga el art. 5º de la Constitución de la República, debiendo ser puesto en libertad el quejoso.

Devuélvanse sus actuaciones al referido juez de Distrito con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos

Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, veintitres de Setiembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juez 2º suplente de Distrito de Puebla de Zaragoza, por el C. Pedro J. Senties, en favor de los CC. Pablo Urrutia y Rafael Cortés, jefe político el primero de Chalchicomula y el segundo de Tecali, contra el juez nato de Distrito del mismo Estado, por los procedimientos de este en la causa que instruye á Urrutia y á Cortés por abusos electorales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez 2º suplente de Distrito.

Los diversos abusos que se han hecho del recurso de amparo, no suministran ejemplo de uno semejante al presente, y difícil será que otro caso igual se repita, pues no es posible que se unan tanta malicia por una parte y tan punible condescendencia por otra, cual ha sucedido en el que me ocupo.

La ley de ocho de Mayo último, consignó á los jueces de Distrito el conocimiento de los delitos que en materia de elecciones pudieran tal vez cometerse: eran por lo mismo de la privativa jurisdicción de tales juzgados esos delitos, y una vez cometidos, tenían ellos facultades de comprobarlos, para aplicar á los infractores las penas de la propia ley.

Tal conducta de parte de los jueces no importa violación de garantía alguna, ni vulnera en nada la soberanía de los Esta-

dos, pues ni ésta consiste en que sus ciudadanos hagan mal uso de los derechos que les competen, contraviniendo á las leyes, ni puede imaginarse que alguna vez pudiera ser garantía la facultad de infringir á sabiendas las leyes.

No trataré de ridículos é infundados los temores del C. Senties relativos á la subvención de las instituciones federales que podría causar un juez de Distrito, pues semejante temor necesitaría para disiparse un trabajo no pequeño, y aun darle un curso completo de derecho constitucional, y muchas lecciones del comun; pero él mismo comprenderá que nunca debió aducir como fundamentos jurídicos sus temores particulares, muy patrióticos sin duda, tratándose de un recurso á que la ley ha dado sus formas, tendencias y objeto, en los términos mas claros y explícitos.

Aun cuando las precedentes consideraciones ninguna importancia tuvieran, bastará para desechar el recurso el art. 3º de la ley de 20 de Enero de 69: "no es admisible el recurso de amparo en los negocios judiciales;" y pues la prision de los gefes políticos y formacion de causa era un negocio meramente judicial, no pudo dársele entrada, segun el tenor del artículo citado.

No me toca examinar la conducta del C. juez suplente, que con tan inesplicable deferencia mandó suspender el acto reclamado: la Suprema Corte de Justicia revisará sus actos, y sobre ellos dispondrá lo que estime de justicia; pero sí es de mi deber pedir la aplicacion de la ley contra el que tan maliciosamente la ha invocado.

Por respeto, pues, á la misma, y á fin de que sea puesta á cubierto en lo futuro de abusos semejantes al presente, el promotor fiscal suplica á vd. se sirva declarar sin lugar el recurso intentado por el C. P. Senties, condenándolo al pago de quinientos pesos de multa por su notoria temeridad, con arreglo al art. 16 de la ley mencionada.

Zaragoza, Agosto veintinueve de mil

ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Eugenio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez 2º suplente de Distrito.

Puebla de Zaragoza, Setiembre ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Pedro Senties, en nombre de los CC. Pablo Urrutia y Rafael Cortés, gefe político el primero de Chalhicomula y el segundo de Tecali, contra las providencias dictadas por el C. juez propietario de Distrito, en la causa que instruye á estos individuos por abusos electorales, fundando su queja en que los procedimientos del C. juez propietario vulneran la soberanía del Estado: visto el requerimiento que se hizo al C. Senties, para que justificara su personalidad exhibiendo los respectivos poderes, y el pedimento del C. promotor fiscal.

Considerando: que los juicios de amparo deben seguirse á petición de la parte agraviada, y que el promovente no ha justificado tener la representación legítima de los quejosos; con fundamento de los artículos 102 de la Constitución de la república y 20 de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo, que se sobresea en este juicio, sin perjuicio de proceder por cuerda separada contra el C. Pedro Senties, por haberlo promovido sin tener la representación de los referidos CC. Urrutia y Cortés: que él mismo reponga el papel comun y del sello quinto que se ha usado con el del correspondiente: que se publique esta sentencia en los periódicos "Diario Oficial del supremo gobierno," "Oficial del Estado" y "Semanario Judicial," elevándose las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Hágase saber. Lo decretó y firmó el C. juez 2º suplente de Distrito del Estado. Doy fé.—*J. Herrero.—Martíniano Ferras.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juez 2º suplente de Distrito de Puebla de Zaragoza por el C. Pedro J. Senties en favor de los CC. Pablo Urrutia y Rafael Cortés, jefe político el primero de Chalehicomula y el segundo de Tecali, contra el juez nato de Distrito del mismo Estado por los procedimientos de este en la causa que instruye á Urrutia y á Cortés por abusos electorales; y

Considerando: en primer lugar, que el C. Senties promovió el juicio sin acreditar representación legítima de los CC. Pablo Urrutia y Rafael Cortés; que por lo mismo no debió darse entrada al juicio, y que una vez dada, y apareciendo la falta de personalidad de quien lo promovió, no debió proseguirse el juicio.

Considerando en segundo lugar: que por la misma falta de personalidad del promovedor, no debió el juez 2º de Distrito mandar suspender el acto respecto del que se pidió amparo, tanto mas cuanto que no se trataba de un caso de notoria y positiva urgencia; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 de la Constitución federal y 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que se confirma el auto pronunciado el ocho del actual por el juez 2º suplente de Distrito de Puebla de Zaragoza, solamente en la parte que manda sobreseer en este juicio; y que se reponga el papel comun y del sello quinto de que se ha usado en el propio juicio, y lo acordado.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de este auto para los efectos consignientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Supre-

ma de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*J. M. Lafragua*.—*P. Ordaz*.—*M. Anza*.—*S. Guzmán*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Perilla*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla por el C. Juan Torres, alcalde 1º de Cholula, contra el gobernador del Estado, por violación de garantías en la persona del quejoso y en las que componen el ayuntamiento de Cholula.

EDICTAMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Seria cosa bien difícil decidir sobre la conveniencia de un recurso que tuviera por objeto corregir los abusos de la autoridad de cualquiera clase que fuera, pues no siendo fundadas todas las quejas, se impondría las mas veces una molestia inútil á las personas que ejercieran aquella. Pero es cosa extraña que el recurso de amparo que no es ya nuevo y cuya aplicacion es tan clara, aun se introduzca por pequeños motivos, contrariando el objeto de las sábias leyes que lo establecen.

El C. Juan Torres, presidente del ayuntamiento de Cholula, se queja de que en su persona se ha violado el derecho de petición que la Constitución otorga á todo ciudadano, y que la misma garantía se ha violado en su perjuicio, porque se le ha depuesto del cargo. El hecho es inexacto; una autoridad que obra con tal investidura, no se reputa como simple ciudadano, porque sus actos deben normarse por la